

ESPAÑA

Camps vuelve un año después a Fitur sin El Bigotes

ADOLF BELTRAN, Valencia

La feria turística Fitur, que hoy comienza en Madrid, cerró el año pasado el 1 de febrero. Cinco días después, la policía buscaba, por orden del juez Baltasar Garzón, los contratos de adjudicación del pabellón valenciano en las dependencias de la Consejería de Turismo, en Valencia. Era el inicio del caso Gürtel, que ha puesto al PP contra las cuerdas y, muy especialmente, al presidente valenciano, Francisco Camps, a quien la trama corrupta de la que formaba parte la empresa Orange Market, adjudicatario del pabellón de 2005 a 2009, regaló trajes.

Camps estará hoy en Fitur acompañado por la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, que era consejera de Turismo en 2005, cuando se otorgó el primer contrato a Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market y hombre de confianza del PP valenciano y del líder de la trama de Francisco Correa, actualmente en prisión.

El pabellón valenciano, por el que Orange Market cobró 5,5 millones (1,1 millones en 2005; poco más de un millón en 2006, 2007 y 2008, y 915.000 euros en 2009), ha cambiado de adjudicatario. Ahora es Montoro Ortega Rubio, aunque siga siendo el mismo subcontratista el encargado del diseño. Eso sí, es más barato: cuesta 814.789 euros. Como destacó el portavoz socialista, Ángel Luna, las denuncias de corrupción han ahorrado a los contribuyentes un 30,5% respecto a la media de lo que cobraba la trama.

Valcárcel advierte que se rebelará si se cercena el trasvase Tajo-Segura

El presidente murciano reafirma con Camps la oposición al Estatuto manchego

JOAQUÍN FERRANDIS
Valencia

El PP intentó ayer responsabilizar al Gobierno central de la guerra del agua que enfrenta a Castilla-La Mancha con la Comunidad Valenciana y Murcia por el futuro del trasvase Tajo-Segura. Sin embargo, las tensiones internas que ha desatado la reforma del Estatuto castellano-manchego afectan tanto al PP como al PSOE, y siguen sin resolverse.

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), advirtió ayer que los diputados del PP de su región "nunca" votarán en el Congreso algo que perjudique los intereses murcianos. Valcárcel, que el pasado lunes se reunió en Madrid con Mariano Rajoy para intentar desbloquear un conflicto que tiene atascada la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, advirtió ayer que si se aprueba cualquier disposición que haga inviable el trasvase recurrirá ante el Constitucional.

El presidente de Murcia se reunió en Valencia con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, ambos del PP, para mostrar que el bloque contrario a que Castilla-La Mancha blinde las aguas del Tajo se mantiene firme.

Camps, cuyo liderazgo se ha visto fuertemente erosionado por el caso Gürtel, evitó pronunciarse al ser interpelado sobre si los diputados y senadores del PP valenciano votarán a favor de un Estatuto castellano-manchego que limite los trasvases del Tajo al Segura. "No queremos perdernos en cuestiones hipotéticas



Francisco Camps (izquierda) y Ramón Luis Valcárcel, durante la reunión en Valencia. / JORDI VICENT

que sólo benefician a quien ha mantenido la crispación en materia de política hídrica", dijo en referencia al Gobierno. Fuentes de la Generalitat justificaron la ausencia de Camps en la entrevista del lunes entre Rajoy y Valcárcel, porque el presidente valenciano ya se reunió con el líder del PP la semana pasada.

Camps y Valcárcel responsabilizaron al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de un conflicto que ha dividido tanto a populares como a socialistas.

Ambos pidieron que sea Zapatero quien resuelva este asunto. "Es una cuestión de Estado", dijo Camps. "Rajoy no preside el Gobierno y Cospedal no es la presidenta de Castilla-La Mancha", remachó Valcárcel.

Tanto los socialistas valencianos como los murcianos acusaron a Camps y Valcárcel de preparar la escenografía para vender su renuncia a defender el trasvase.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE), advirtió a Camps y Val-

cárcel que no aceptará "ser menos que los demás" y reclamó su derecho a hablar de agua en el Estatuto igual que aragoneses, andaluces y valencianos.

Cospedal se movió en la ambigüedad: "El PP va a defender siempre un Plan Hidrológico Nacional, el principio de preferencia de la cuenca cedente sobre la cuenca cesionaria, y de cauces sostenibles medioambientalmente más allá de defensas concretas que cada uno haga en defensa de los derechos de los ciudadanos de una región".

La sogá en casa del ahorcado

JAVIER PRADERA



Los viejos partidos de clase o profesionales contaban de forma casi exclusiva con las cuotas y las horas de trabajo gratuito de los militantes para mantener las sedes, organizar los mítines, costear la prensa y pagar las campañas. Pero la dinámica democrática ha convertido a esas asociaciones voluntarias en las verdaderas operadoras del sistema político, situadas en un limbo constitucional equidistante del Estado y de la Sociedad Civil. Los partidos reciben ahora sustanciosos fondos presupuestarios para sus gastos electorales y de funcionamiento; los miles de cargos electos de las diversas Administraciones, designados en la práctica por las direcciones partidistas, son un yacimiento de empleo y de patrocinio controlado por la cúpula de unas organizaciones fuertemente jerarquizadas.

Pese a que la propaganda electoral en

los medios de comunicación públicos sea gratuita, las campañas publicitarias rompen el techo máximo de gastos legalmente autorizado. La manifestación primigenia de la corrupción política en las democracias modernas es precisamente la financiación irregular de los partidos, que reciben por debajo de la mesa el dinero necesario para satisfacer su bulimia monetaria a cambio de favores.

La capacidad de gasto conspicuo de los partidos no tiene límites. Los tiempos muertos entre elecciones están cubiertos por una proliferación de caros y vistosos congresos y convenciones. Aumenta así el déficit de la tesorería partidista; y también se amplían los espacios disponibles para la invasión del ámbito público por la iniciativa privada y de las motivaciones altruistas por el afán de lucro. El caso Gürtel ha mostrado cómo esos espectáculos político-circenses —con sus infladas facturas de azafatas, claques, acarreo, alfombras rojas, charangas y banderas al viento— subarrendados por los partidos o por las administraciones públicas bajo su control a empresas privadas suelen añadir la estafa al despilfarro.

La XV Interparlamentaria del PP celebrada en Palma de Mallorca el pasado fin de semana pertenece a ese género de encuentros público-festivos organizados para mantener viva la movilización de los

votantes y para ocupar los titulares de los medios de comunicación en los fines de semana de las temporadas bajas. Cualquier asunto es bueno para nutrir la agenda de esos superfluos acontecimientos: por ejemplo, un reciente sondeo realizado en Andalucía, que sitúa al PP casi dos puntos por encima del PSOE tras casi 30 años de ininterrumpida hegemonía socialista, sirvió a los dirigentes populares para elevar la moral de sus militantes como irrefutable prueba del nueve del supuesto vuelco irreversible producido en la opinión pública española.

Rajoy predica en el feudo de Jaume Matas el Código de Buenas Prácticas del PP

La amenazadora propuesta avanzada por el Ayuntamiento de Vic (gobernado por CiU, PSC y ERC) para excluir del padrón municipal a los inmigrantes que carezcan de permisos de residencia y de trabajo en España también fue mencionada en su discurso de cierre de la XV Interparlamentaria del PP; el acuse de recibo de Rajoy sonó de manera inquietante, pero

la oscuridad y la imprecisión de sus términos impiden conocer hasta qué punto el líder del PP avala la brutal medida —como a primera vista parece— del Ayuntamiento de Vic para excluir a los inmigrantes irregulares de los servicios públicos de salud y educación.

No parece, en cualquier caso, que los planificadores del programa de eventos político-mediático del calendario del PP hayan acertado al elegir como escenario de la XV Interparlamentaria una comunidad batida por los escándalos de corrupción desde la presidencia de Gabriel Cañellas hasta la reciente etapa de Jaume Matas, el último presidente del PP implicado en el escándalo del Palma Arena e investigado judicialmente por la compra personal de un palacete. Parece una provocación o una broma de mal gusto que a las dos semanas de promulgación del Código de Buenas Prácticas del PP, sedicentemente dictado para vigilar "el digno ejercicio de la actividad política" dado que "no es posible exigir regeneración a los demás si previamente no se asume un compromiso de autoexigencia", Rajoy haya comparecido en Palma como el nuevo Moisés de la ética política. ¿No es una temeridad o un descaro haber mencionado la sogá en la casa del ahorcado sin concretar siquiera su apellido y defender a renglón seguido la presunción de su inocencia?